

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Rad: 11001-31-100-30-2021-00828-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por MIRIAM ROMERO SANCHEZ contra la NUEVA EPS

ANTECEDENTES

La señora MIRIAM ROMERO SANCHEZ inicia acción de tutela contra la NUEVA EPS, por considerar que se le están vulnerando el derecho fundamental a la vida, la seguridad social y el derecho a la igualdad.

HECHOS Y PRETENSIONES

Sostiene la accionante que se encuentra afectada por un problema de salud denominado falla cardiaca, hipertensión pulmonar idiopática el cual ha venido siendo tratado.

Refiere que en el 10 de noviembre le dieron órdenes para solicitar citas, y pese a solicitar el tramite a la NUEVA E.P.S., le responden que no hay citas, sin tener en cuenta la gravedad de su estado de salud.

Indica que ha estado varias veces hospitalizada en la Clínica Shaio en razón al hipotiroidismo avanzado que padece, y que requiere que se le dé la cita dentro del término establecido por su delicado estado de salud.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Copia de Epicrisis impresa de la Fundación Clínica Shaio de fecha 10 de noviembre de 2021
- Copia de solicitudes de autorización de procedimientos expedidos por la Fundación Clínica Shaio de fecha 10 de noviembre de 2021.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 01 de diciembre de 2021, se ordenó la notificación de la convocada, para que en término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 02 de diciembre de 2021, se notificó a la NUEVA EPS, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- La accionada contestó la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

CONTESTACIÓN de la NUEVA EPS

La entidad accionada refirió: “NUEVA EPS garantiza la prestación de los servicios de salud MYRIAM ROMERO SANCHEZ CC 39570787 dentro de su red de prestadores según lo ordenado por el médico tratante y de acuerdo con la Resolución 2481 de 2020 y demás normas concordantes. Por lo tanto, no es procedente se dé trámite a órdenes de médicos particulares que la accionante haya acudido, toda vez que no prueba omisión o negligencia injustificada de la EPS para cubrir con la patología presentada.

En ese orden de ideas, se enfatiza en que NUEVA EPS no presta el servicio de salud directamente, sino a través de una red de prestadores de servicios de salud contratadas, las cuales son avaladas por la secretaria de salud del municipio respectivo; dichas IPS programan y solicitan autorización para la realización de citas, cirugías, procedimientos, entrega de medicamentos, entre otros, de acuerdo con sus agendas y disponibilidad.

Ahora bien, Nueva EPS, garantiza la prestación de servicios dentro del marco del Plan de beneficios a través de su Red de Prestadores y que se puede observar en la página web de la entidad a través del siguiente LINK: <https://www.nuevaeps.com.co/red-atencion>. Así las cosas, de manera jurisprudencial el derecho a la libre escogencia se limita a que la IPS que desea se dé la atención esté dentro de la Red de Prestadores de Servicios de Salud dispuesta para atender las contingencias presentadas y en el marco del Plan de Beneficios de la EPS en la que hace parte.

Por otro lado, se deja en conocimiento, que la compañía se compone por diferentes áreas, las cuales cuentan con personal capacitado que trabaja organizadamente encaminando los procesos a seguir de acuerdo con su pertinencia, conocimiento y funciones específicas. Por lo tanto, mi defendida cumplió con su deber legal de autorizar todo lo necesario para tratar la patología del accionante.”

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

En el caso bajo examen, la ciudadana MYRIAM ROMERO SANCHEZ, se encuentra legitimada en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del citado postulado constitucional.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la NUEVA EPS es la entidad prestadora de salud, a la que actualmente se encuentra afiliada la accionante y a quien se le aduce la vulneración de los derechos invocados y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El artículo 48 de la Constitución Política establece el derecho a la seguridad social en una doble dimensión. Por un lado, lo contempla como un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Por otro lado, lo consagra como una garantía de carácter irrenunciable e imprescriptible de todas las personas, representada en la cobertura de (i) pensiones, (ii) salud, (iii) riesgos profesionales y (iv) los servicios sociales complementarios definidos en la misma ley. Lo anterior, a través de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social que se refleja necesariamente en el pago de las prestaciones sociales estatuidas.

Sobre el carácter fundamental del derecho a la seguridad social, la Corte señaló en la Sentencia T-468 de 2007 que: “una vez provista la estructura básica del Sistema General de

Seguridad Social, las prestaciones que lo componen y las autoridades responsables de brindarlas, y además, una vez establecida una ecuación constante de asignación de recursos en la cual están llamados a participar los beneficiarios del sistema y el Estado como último responsable de su efectiva prestación “la seguridad social adquiere el carácter de derecho fundamental, lo cual hace procedente su exigibilidad por vía de tutela”.

DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD

El artículo 13 de la Constitución Nacional refiere el derecho a la igualdad y establece: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica...”

Problema Jurídico

Corresponde a esta Juzgadora determinar si las entidades accionadas han vulnerado el derecho fundamental a la vida, la seguridad social y el derecho a la igualdad.

CASO CONCRETO

En la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 86, la acción de tutela, fue erigida como un instrumento de protección ante las autoridades judiciales, siendo subsidiaria, residual y autónoma, permitiendo el control constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares. De contera, que jurisprudencialmente se ha decantado que la Acción de tutela, ostenta al menos cinco funciones importantes:

1. Proteger de manera residual y subsidiaria los derechos fundamentales de los habitantes frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares que puedan violarlos.
2. Afianzar y defender de manera coherente y ordenada, la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica.
3. Actualizar el derecho legislado, en especial el derecho preconstitucional, orientado a todos los servidores públicos para que lo interpreten y apliquen a la luz del derecho constitucional.
4. Unificar la interpretación sobre el alcance de los derechos fundamentales.
5. Promover una cultura democrática fundada en la protección efectiva de los derechos de las personas y en los valores del Estado social y democrático de derecho.

Ahora bien, esta especial figura está reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, consagrando en su Artículo 6º, las causales generales de improcedencia que tienden a racionalizar el uso de la acción, y que supeditan su viabilidad a la no existencia de otro medio de defensa judicial salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio *iusfundamental* irremediable.

Dentro del caso concreto se allegó copia de formulario de Epicrisis impresa por la Fundación Clínica Shaio del cual se lee: “Paciente de 47 años con antecedente de hipertensión

pulmonar severa, Grupo I y enfermedad de Frave, hospitalizada en contexto de falla cardíaca derecha crónica agudamente descompensada Stevenson B, AHA C, NYHA III/IV, FEVI 47% CAF 16% y TSVP tipo flutter atrial vs taquicardia atrial no inestabilizante. En el ecocardiograma transtorácico institucional del ventrículo derecho dilatado con insuficiencia tricúspidea funcional masiva e hipertensión pulmonar severa, quien ya cuenta con estudio de cateterismo derecho, con prueba de vasoreactividad extrainstitucional positiva en manejo con inhibidor de fosfodiesterasa, betabloqueador y prostanoide. Quien estuvo hospitalizada el pasado 28 de octubre en el contexto de descompensación de su falla cardíaca. Quien consulta por cuadro de dos días nde (sic) de evolución consistente en ortopnea, ingurgitación yugular, disnea de medianos esfuerzos, ascitis y dolor abdominal. Además, viene remitida en consulta por cardiología el Dr. Mendoza quien remite a valoración para exacerbación de falla cardíaca aguda...”

De lo anterior, concluye el Despacho que se encuentra probado que, la accionante, cuenta con un diagnóstico clínico correspondiente a una deficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar severa, conforme a lo manifestado en los hechos de la demanda y que no fue objeto de debate y contradicción por la accionada NUEVA E.PS.

Igualmente obran las correspondientes ordenes médicas expedidas por el médico tratante de la Fundación Clínica Shaio, correspondientes a consulta de control o de seguimiento por especialista en cardiología, monitoreo electrocardiográfico continuo, consulta de control o de seguimiento por especialista endocrinología y la solicitud de autorización para realizar procedimientos de laboratorio.

Ahora bien, conforme a la contestación allegada por la NUEVA E.P.S., se tiene que la accionante se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social a través de la accionada con cargo al Régimen Contributivo, desprendiéndose de los fundamentos de derecho expuestos que, la autorización de procedimientos de que tratan las ordenes medicas expedidas por el médico tratante de la Fundación Clínica Shaio, no han sido autorizadas por la accionada en razón que la consideración que no es procedente dar trámite a órdenes de médicos particulares a los que la accionante haya acudido, pues ello no prueba omisión o negligencia injustificada de la EPS para cubrir la patología de la accionante, como quiera que los afiliados a la NUEVA E.P.S. cuentan con una IPS asignada desde el momento de afiliación.

Atendiendo a lo anterior, se tiene por el Despacho que la accionada, no pone en conocimiento ni demuestra al Despacho que la accionante cuenta con IPS designada diferente a la Fundación Clínica Shaio, misma desde la cual se ordenaron las ordenes médicas correspondientes a consulta de control o de seguimiento por especialista en cardiología, monitoreo electrocardiográfico continuo, consulta de control o de seguimiento por especialista endocrinología y la solicitud de autorización para realizar procedimientos de laboratorio, y sobre las cuales se pretende la tutela, así como tampoco se demostró que el mencionado centro médico no cuenta con algún tipo de convenio que autorice la atención de pacientes afiliados a la NUEVA E.P.S.

Por otro lado, atendiendo a las documentales obrantes en el plenario, también encuentra el Despacho que los procedimientos pendientes de autorización, fueron ordenados bajo el procedimiento de hospitalización realizado ante la Fundación Clínica Shaio con ingreso del 08 de noviembre del 2021, por descompensación de falla cardíaca y síntomas relacionados

a hipertiroidismo que presentó la accionante, lo cual se evidencia conforme al informe de evolución dentro del formulario de Epicrisis aportado con la acción de tutela, sin que se pueda pasar por alto que la accionante contaba con antecedente de hospitalización en el indicado centro clínico de fecha 28 de octubre de 2021 bajo diagnóstico de falla cardiaca aguda.

Así las cosas, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1571 de 2015 y reiterada jurisprudencia, encuentra el Despacho que no le asiste razón a la NUEVA E.P.S. para negar la autorización de los procedimientos requeridos por la accionante por razones administrativas, pues se advierte que el servicio de salud debe prestarse de manera que se garantice la continuidad del mismo, sin que sea posible interrumpirlo cuando ello implica la vulneración a garantías constitucionales como la vida, salud e integridad personal.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en sentencia T-603/2010 ha indicado respecto a la continuidad del servicio de salud que:

“La continuidad se refiere a que a la EPS no le es permitido suspender tratamientos médicos ya iniciados. Dicho principio se fundamenta en i) la necesidad del paciente de recibir tales servicios y en ii) el principio de buena fe y confianza legítima que rige las actuaciones de los particulares y de las entidades públicas y que consiste precisamente en “la garantía que tiene la persona de que no se le suspenderá su tratamiento una vez iniciado”

La Corte ha señalado que “para que se continúe con un tratamiento médico o con el suministro de un medicamento, es necesario determinar si la suspensión de los medicamentos viola derechos fundamentales, y para esto se deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Debe ser un médico tratante de la EPS quien haya determinado el tratamiento u ordenado los medicamentos; 2. El tratamiento ya se debió haber iniciado, o los medicamentos suministrados (...). Esto significa que debe haber un tratamiento médico en curso. 3. El mismo médico tratante debe indicar que el tratamiento debe continuar o los medicamentos deben seguir siendo suministrados”.

2.4.3.2 La integralidad por su parte atañe a que “(...) la atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”

En casos en los que se ha requerido el suministro de un tratamiento integral, esta Corte ha tutelado y ordenado éste incluso cuando la IPS que lo ofrece no tiene convenio con la EPS en la cual el accionante está afiliado, o en una de idénticas calidades, especialidad e idoneidad de la IPS sugerida.”

Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional ha dicho “En múltiples ocasiones, diferentes Salas de Revisión de esta Corporación han señalado que los usuarios del Sistema de Salud tienen el derecho constitucional a que se les garantice el acceso efectivo a los servicios médicos necesarios e indispensables para tratar sus enfermedades, recuperar su salud y resguardar su dignidad humana. Esto fue recogido por la sentencia T-760 de 2008 en la regla: toda persona tiene derecho a que la entidad encargada de garantizarle la prestación de los servicios de salud, EPS, autorice el acceso a los servicios que requiere, incluso si no se encuentran en el plan obligatorio de salud, pues lo que realmente interesa es si de aquel depende la dignidad y la integridad del peticionario y si el servicio ha sido ordenado por el médico tratante.

En esta línea, la Corte ha resaltado que, en el Sistema de Salud, quien tiene la competencia para determinar cuándo una persona requiere un procedimiento, tratamiento, o medicamento para promover, proteger o recuperar su salud es, prima facie, el médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce de primera mano y de manera detallada la condición de salud del paciente.

La importancia que le ha otorgado la jurisprudencia al concepto del médico tratante se debe a que éste (i) es un profesional científicamente calificado; (ii) es quien conoce de manera íntegra el caso de su paciente y las particularidades que pueden existir respecto de su condición de salud y (iii) es quién actúa en nombre de la entidad que presta el servicio.

En consecuencia, es la persona que cuenta con la información adecuada, precisa y suficiente para determinar la necesidad y la urgencia de un determinado servicio a partir de la valoración de los posibles riesgos y beneficios que este pueda generar y es quién se encuentra facultado para variar o cambiar la prescripción médica en un momento determinado de acuerdo con la evolución en la salud del paciente.

(...) Por lo tanto, la condición esencial para que el juez constitucional ordene que se suministre un determinado procedimiento médico o en general se reconozcan prestaciones en materia de salud, es que éste haya sido ordenado por el médico tratante, pues lo que se busca es resguardar el principio según el cual, el criterio médico no puede ser remplazado por el jurídico, y solo los profesionales de la medicina pueden decidir sobre la necesidad y la pertinencia de un tratamiento médico”. (Sentencia T345/13).

En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene el juez constitucional, en caso de encontrar amenazado o vulnerado el derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta del derecho que se aduce.

Por lo anterior, atendiendo a que la accionada NUEVA EPS, no acreditó que la accionante tuviera asignada una IPS diferente a la Fundación Clínica Shaio, o tan siquiera que dicho centro clínico no cuenta con convenio vigente para la prestación de servicios médicos a sus afiliados, y que adicionalmente, se advierte que las ordenes médicas expedidas el 10 de noviembre de 2021, y sobres las cuales se solicita su amparo, fueron expedidas dentro de un procedimiento de hospitalización por presentar “descompensación de falla cardíaca y síntomas relacionados a hipertiroidismo”, concluye el Despacho que la accionada, tiene la obligación legal de prestar el servicio de salud de forma continua a la accionante, esto

teniendo en cuenta que en razón a su diagnóstico médico se le refiere a la accionante como paciente de alto riesgo, sin colocar barreras administrativas que retarden la prestación efectiva del mismo, por lo que se tutelaré el derecho a la salud, a fin de que de manera diligente, se le brinde a la accionante una atención pronta y oportuna, no se coarte su derecho fundamental como es la protección a la salud y la prestación de todos los tratamientos médicos requeridos, toda vez que la negativa del servicio puede llegar a desencadenar complicaciones en la salud y en la vida misma de quien está requiriendo el servicio médico.

En este orden de ideas, se tutelaré el derecho a la vida y la salud, respecto de la accionante **MIRIAM ROMERO SANCHEZ** identificada con C.C. 39.570.787, y lo por tanto se ORDENA al representante legal de la NUEVA EPS y/o quien haga sus veces, que de manera inmediata proceda a garantizar el Tratamiento Integral requerido por la accionante, autorizando de manera urgente, y sin dilaciones para la accionante, conforme a las ordenes médicas de fecha 10 de noviembre de 2021 expedidas por el médico tratante de la Fundación Clínica Shaio, la consulta de control o de seguimiento por especialista en cardiología; monitorio electrocardiográfico continuo (holter); consulta de control o de seguimiento por especialista en endocrinología; y la práctica de procedimientos correspondientes a: Bilirrubinas total y directa, creatinina en suero u otros fluidos, hemograma IV (hemoglobina hematocrito recuento de eritrocitos índices eritrocitarios leugrama recuento de plaquetas ín), hormona estimulantes de tiroides ultrasensible, nitrógeno ureico, proteínas diferenciadas (albumina-globulina), tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial (TTP), tiroxina libre, transaminas glutámico oxalacética (aspartato amino trasferasa), transaminas clutámico-pirúvica (alanino amino trasferasa) y triyodotironina total, adoptando las medidas administrativas correspondientes para que las mismas sean autorizadas ya sea en la correspondiente IPS asignada a la accionante o en el centro clínico de expedición de las ordenes médicas.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional invocado por la accionante **MIRIAM ROMERO SANCHEZ** identificada con C.C.39.570.787, de conformidad a la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO: ORDENAR al Representante Legal de **NUEVA EPS** y/o a quien haga sus veces, que de manera inmediata proceda a garantizar el tratamiento integral requerido por la accionante **MIRIAM ROMERO SANCHEZ** identificada con C.C.39.570.787, autorizando de manera urgente y sin dilaciones la consulta de control o de seguimiento por especialista en cardiología, el monitorio electrocardiográfico continuo (holter), la consulta de control o de seguimiento por especialista en endocrinología, y la práctica de procedimientos correspondientes a: Bilirrubinas total y directa, creatinina en suero u otros fluidos, hemograma IV (hemoglobina hematocrito recuento de eritrocitos índices eritrocitarios leugrama recuento de plaquetas ín), hormona estimulantes de tiroides ultrasensible, nitrógeno ureico, proteínas diferenciadas (albumina-globulina), tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial (TTP), tiroxina libre, transaminas glutámico oxalacética (aspartato amino trasferasa), transaminas clutámico-pirúvica (alanino amino trasferasa) y triyodotironina total

TERCERO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

CUARTO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

QUINTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ**

Firmado Por:

**Viviana Marcela Porras Porras
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 030
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **00126891b3d03cb065130d3df4050ddd796bfd83999a07c1a6d20208fab8d958**

Documento generado en 15/12/2021 04:30:54 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>